

a) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los términos establecidos en el número 3 del artículo 66 del texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril.

b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial durante el período de instalación.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 152/1963, conforme a lo establecido en dicho precepto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 464/1969, de 27 de marzo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

11547 *ORDEN de 27 de marzo de 1979 por la que se conceden a la Empresa «Productos Vital-Carlos Schneider, S. A.», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.*

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de 22 de febrero de 1979, por la que se declara a la Empresa «Productos Vital-Carlos Schneider, S. A.», comprendida en el sector industrial agrario b), elaboración de mostos frescos estériles o concentrados, del artículo 1.º del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, para la ampliación de su industria de elaboración, concentrado y embotellado de mostos, emplazada en Gandía (Valencia)

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 3.º del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «Productos Vital-Carlos Schneider, S. A.», y por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

a) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial durante el período de instalación.

b) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los términos establecidos en el número 3 del artículo 66 del texto refundido, aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril.

c) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, que graven la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación en primera instalación a bienes de equipo de producción nacional. El plazo de cinco años para el disfrute de esta reducción se contará, en su caso, a partir del primer despacho provisional que conceda la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de marzo de 1976.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los beneficios concedidos y, por consiguiente, al abono o reintegro, en su caso, de los Impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

11548 *ORDEN de 27 de marzo de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, dictada en 12 de enero de 1978, en el recurso contencioso-administrativo número 482/1976, interpuesto por «Fortuny, Sociedad Anónima», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central en relación con el Impuesto sobre el Lujo. Declarada desierta la apelación ante el Tribunal Supremo en 13 de febrero de 1979.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 12 de enero de 1978 por la Sala Primera de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, en recurso contencioso-administrativo número 482/1976, interpuesto por «Fortuny, S. A.», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de mayo de 1976, en relación con el Impuesto sobre el Lujo;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Est. Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, respecto a la cual se certifica en 13 de febrero de 1979 que por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se había declarado desierta la apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Fortuny, Sociedad Anónima», contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y seis, por hallarse conforme a derecho, declarando en consecuencia la competencia del Jurado Territorial Tributario para determinar las bases imponibles por el Impuesto de Lujo de la Empresa recurrente, por el período mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos sesenta y nueve; no hacemos expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de marzo de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

11549 *ORDEN de 2 de abril de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de octubre de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración Pública, por el concepto de tasa por dirección e inspección de obras, siendo parte apelada la Empresa «Entrecanales y Távora, Sociedad Anónima».*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada el 18 de octubre de 1978, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 34.189/1978, interpuesto, en grado de apelación, por el señor Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración Pública, contra la sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 1978, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso número 236 de 1977, sobre liquidación por la tasa de gastos y remuneraciones en dirección e inspección de obras, siendo parte apelada «Entrecanales y Távora, S. A.».

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia del Tribunal Supremo, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando la apelación número treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, interpuesta por el Abogado del Estado, en representación de la Administración General, contra sentencia dictada en tres de febrero de mil novecientos setenta y ocho por la Sala jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Valladolid, sobre liquidación por tasa girada por la Confederación Hidrográfica del Duero por inspección de la obra de mejora y ampliación del abastecimiento y saneamiento de Palencia, en que es parte apelada la Empresa «Entrecanales y Távora, S. A.», debemos declarar y declaramos, con revocación de la sentencia apelada por su desconformidad con el ordenamiento jurídico, que los actos administrativos impugnados ante esta jurisdicción son válidos y por tanto la liquidación origen de los mismos; sin costas.»

Lo que comunico a V. I. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

11550 *ORDEN de 2 de abril de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 507.821.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 507.821, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por doña Cecilia González Magán contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre revocación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 9 de enero de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que aceptando la alegación de inadmisibilidad aducida por la Abogacía del Estado, declaramos inadmisibile

el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Cecilia González Magán contra el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos setenta y seis, de nueve de enero; sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan V. Barquero, Eduardo de No, Antonio Agúndez, Adolfo Carretero, Rafael Casares (con las rúbricas).

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado ponente don Eduardo de No Luis en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha. Ante mí, José Benítez. (rubricados).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de abril de 1979.—P. D., el Director general de Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

11551 *ORDEN de 2 de abril de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 507.909.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 507.907, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por doña Antonia Gómez García contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre revocación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 20 de diciembre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que aceptando la alegación de inadmisibilidad aducida por la Abogacía del Estado, declaramos inadmisibile el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Antonia Gómez García contra el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos setenta y seis, de nueve de enero; sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan V. Barquero, Alfonso Algara, Víctor Serván, Angel Falcón, Miguel de Páramo (con las rúbricas).

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado ponente don Alfonso Algara Saiz en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha. Ante mí, José Benítez (rubricados).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de abril de 1979.—P. D., el Director general de Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

11552 *ORDEN de 2 de abril de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 507.199.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 507.199, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Alfonso González Rey y Cuervo de Arango contra la Administración representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación del acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 1976, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 31 de enero de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que rechazando las causas de inadmisibilidad propuestas por el Abogado del Estado, desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Alfonso González Rey y Cuervo de Arango, en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis y Decreto tres mil sesenta y cinco/mil novecientos setenta y tres, de veintitrés de diciembre, y su acto de aplicación al efectuar el pago del sueldo mensual al recurrente, por ser conforme a derecho, en la determinación del coeficiente cuatro a la plaza servida por el señor González Rey en el Canal de Isabel II; absolviéndolo a la Administración de la demanda contra ella formulada, y sin condena en las costas causadas en este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan V. Barquero, Alfonso Algara, Víctor Serván, Angel Falcón, Miguel de Páramo (rubricados).

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado ponente de la misma, don Angel Falcón García en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de lo que certifico: María del Pilar Heredero (rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de abril de 1979.—P. D., el Director general de Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

11553 *ORDEN de 2 de abril de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 508.654.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 508.654, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Juan José Torri Tur contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre revocación de la denegación tácita, por silencio administrativo del Ministerio de Hacienda, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 20 de diciembre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que aceptando la alegación en al sentido formulada por la Abogacía del Estado, declaramos inadmisibile el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Torri Tur contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto mil cuatrocientos noventa y cuatro/mil novecientos setenta y cinco, de cinco de junio, que asignó a la escala de Celadores de Costas el coeficiente uno coma cuatro. Todo ello sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan V. Barquero, Eduardo de No, Adolfo Carretero, Rafael Casares, Pablo García (con las rúbricas).

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado ponente don Eduardo de No Luis en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha. Ante mí, José Benítez (rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de abril de 1979.—P. D., el Director general de Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

11554 *ORDEN de 2 de abril de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 508.089.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 508.089, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Saturnino Rodrigo Rodríguez contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación del Decreto número 131/1976, de 9 de enero, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 22 de diciembre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad propuesta por el Abogado del Estado de este recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Saturnino Rodrigo Rodríguez contra el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos setenta y seis, de nueve de enero, con la pretensión procesal de que se modifique, así como la Orden del Ministerio de Justicia de cinco de febrero de mil novecientos setenta y seis y el Real Decreto tres mil doscientos noventa y dos/mil novecientos setenta y seis, de treinta y uno de diciembre; sin entrar, en consecuencia, en el examen del fondo del recurso ni hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla-